

Tipo de documento: Artículo original

Mecanismos de comunicación, consulta y participación ciudadana en la gestión de la conflictividad social durante el reasentamiento poblacional de Morococha, 2009–2013

Communication, Consultation and Citizen Participation Mechanisms in the Management of Social Conflict during the Population Resettlement of Morococha, 2009–2013

Resumen

Analizar la contribución de los mecanismos de comunicación, consulta y participación ciudadana en la gestión de la conflictividad social generada por el proceso de reasentamiento poblacional de Morococha, realizado entre 2009 y 2013 en el contexto del Proyecto Minero Toromocho es importante para entender el aporte que estos mecanismos coadyuvieron en el proceso. En la investigación se empleó un enfoque cualitativo con diseño descriptivo no experimental. La población de estudio estuvo conformada por actores vinculados al proceso de reasentamiento —pobladores, especialistas y relacionistas comunitarios—, seleccionándose una muestra no probabilística de 30 entrevistados por saturación. La información se obtuvo mediante entrevistas semiestructuradas y revisión documental de informes, actas y registros generados en el proceso. Los hallazgos evidencian que los mecanismos de comunicación —visitas casa por casa, talleres informativos, oficinas de información permanente y medios alternativos, junto con las consultas públicas y los espacios participativos —audiencias, talleres barriales, foros y procesos de nominación de calles—, facilitaron el flujo de información, la generación de consensos y la toma de decisiones colectivas reduciendo la conflictividad social en un contexto multi actor, multi intereses y multi escenarios. Su aplicación diferenciada por etapas en el proceso de reasentamiento contribuyó a prevenir conflictos y garantizar la viabilidad social del reasentamiento poblacional como un proceso participativo e informado en concordancia a estándares globales de desempeño social. La articulación adecuada entre comunicación, consulta y participación ciudadana permitió reducir la conflictividad social y fortalecer la legitimidad del proceso de reasentamiento. Se concluye que estos mecanismos, gestionados con transparencia y continuidad, son herramientas efectivas para la gobernanza participativa en contextos de proyectos extractivos que requieren procesos de reasentamiento poblacional.

Palabras clave: Comunicación social; participación ciudadana; consulta pública; conflictividad social; reasentamiento poblacional.

Abstract

Analyzing the contribution of communication, consultation, and citizen participation mechanisms in managing the social conflict generated by the population resettlement process of Morococha, carried out between 2009 and 2013 in the context of the Toromocho Mining Project, is important to understand the contribution that these mechanisms made to the process.

The research employed a qualitative approach with a non-experimental, descriptive design. The study population consisted of actors involved in the resettlement process – residents, specialists, and community relations professionals – and a non-probability sample of 30 interviewees was selected based on saturation. Data was collected through semi-structured interviews and a review of reports, minutes, and records generated during the process. The findings demonstrate that communication mechanisms – door-to-door visits, information workshops, permanent information offices, and alternative media – along with public consultations and participatory spaces – hearings, neighborhood workshops, forums, and street naming processes – facilitated the flow of information, consensus-building, and collective decision-making, thereby reducing social conflict in a multi-actor, multi-interest, and multi-scenario context.

Its phased application throughout the resettlement process helped prevent conflicts and ensure the social viability of population resettlement as a participatory and informed process, in accordance with global standards of social performance. The effective integration of communication, consultation, and citizen participation reduced social conflict and strengthened the legitimacy of the resettlement process. It is concluded that these mechanisms, managed transparently and continuously, are effective tools for participatory governance in extractive project contexts that require population resettlement.

Keywords: *Social communication; citizen participation; public consultation; social conflict; population resettlement.*

1. Introducción

Los procesos de reasentamiento poblacional asociados a proyectos extractivos y/o de infraestructura constituyen escenarios críticos dentro de la gestión territorial contemporánea, debido a las transformaciones estructurales que implican en términos de reorganización espacial, reconversión económica y reconfiguración socio comunitaria. En contextos donde convergen intereses estatales, corporativos y ciudadanos; la redistribución del territorio y el desplazamiento planificado de poblaciones generan tensiones que, de no ser gestionadas adecuadamente, pueden derivar en conflictos sociales de largo alcance. La

literatura especializada en gobernanza extractiva y de mega proyectos de infraestructura sostiene que estos procesos requieren marcos institucionales robustos, sustentados en mecanismos de información transparente, consulta oportuna y participación efectiva de la ciudadanía, elementos considerados fundamentales para la construcción de legitimidad social (Bebbington, 2013; Arellano-Yanguas, 2011; Humphreys & Bebbington, 2015).

En América Latina, los reasentamientos vinculados a actividades mineras han evidenciado heterogeneidad en sus resultados, reflejada tanto en experiencias exitosas como en situaciones de conflictividad ampliada. Esta variabilidad depende, entre otros factores, de los niveles de institucionalidad, de la capacidad de gestión social de los actores involucrados y de la existencia de canales formales que garanticen la deliberación colectiva. Estudios clásicos sobre reasentamiento y desplazamiento involuntario (Cernea, 1997; Downing, 2002) plantean que la planificación debe incorporar estrategias que reduzcan los riesgos de empobrecimiento, pérdida de redes sociales, desarticulación comunitaria y debilitamiento de estructuras de representación. En concordancia, investigaciones recientes han señalado que el acceso a información precisa, la inclusión en procesos consultivos y la posibilidad de participación informada activa en decisiones territoriales constituyen factores determinantes para evitar el escalamiento de conflictos y promover una transición más ordenada hacia el nuevo asentamiento (Van Der Ploeg & Bebbington, 2011; Damonte, 2018).

El caso de Morococha representa una de las intervenciones más complejas del Perú contemporáneo, tanto por la magnitud del traslado poblacional como por las implicancias socioeconómicas del proyecto minero Toromocho. La reubicación de una ciudad completa implicó desafíos de planificación urbana, negociación social, gestión institucional y acompañamiento técnico. Si bien el Estado peruano cuenta con normativas para procesos de reasentamiento por temas de zonas de riesgo no mitigable y de proyectos de necesidad pública, la implementación práctica suele presentar vacíos que requieren ser analizados detalladamente para comprender su alcance real de estas en un contexto totalmente ajeno del alcance estatal en los procesos, ejecutados por las empresas a cargo de los proyectos mineros, basándose estos en estándares globales de desempeño socio ambiental como la de la IFC u otras fuentes financieras de este tipo de mega proyectos. En este contexto, los mecanismos de comunicación, consulta y participación ciudadana implementados por el Plan de Reasentamiento Poblacional (PAR) adquieren relevancia central para comprender cómo se gestionó el consenso, cómo se canalizaron las expectativas y cómo se abordaron los focos de conflictividad durante el proceso.

A pesar de la importancia del caso, los estudios existentes han abordado el reasentamiento de Morococha principalmente desde perspectivas descriptivas o centradas en el análisis del conflicto socioambiental. Sin embargo, persiste un vacío académico respecto a la evaluación integral y sistemática de los mecanismos comunicacionales y participativos empleados, así como de su relación directa con la gestión de la conflictividad social. La literatura nacional carece de investigaciones que analicen en profundidad la dinámica interna de estos mecanismos, su secuencia operativa, su capacidad para sostener procesos deliberativos y su influencia en la construcción de legitimidad local. Este vacío limita la posibilidad de generar aprendizajes extrapolables a otros contextos donde proyectos extractivos demandan procesos de reasentamiento poblacional.

En este marco, el presente tiene como objetivo analizar los mecanismos de comunicación, consulta y participación ciudadana implementados en el proceso de reasentamiento de Morococha, examinando su funcionamiento, su articulación y su efecto en la gestión de la conflictividad social. La investigación adopta una perspectiva analítica que combina elementos de la teoría de gobernanza, la sociología del territorio y los estudios sobre participación ciudadana, con el fin de comprender cómo se configuraron las relaciones entre actores y cómo estas dinámicas influyeron en las diferentes etapas del proceso.

El estudio busca aportar al campo académico ofreciendo evidencia empírica sistematizada y un análisis crítico que contribuya a fortalecer los debates sobre políticas de reasentamiento poblacional, gestión social en minería y mecanismos de participación en contextos multi escenarios, multi actores y multi intereses de alta complejidad. Asimismo, los resultados permiten identificar lecciones que pueden orientar futuros procesos de intervención territorial, especialmente en regiones donde la expansión de actividades extractivas continúa generando demandas de reubicación poblacional.

2. Métodos

La investigación se desarrolló bajo los lineamientos del método científico en ciencias sociales (Hernández Sampieri & Mendoza, 2018), adoptando un enfoque cualitativo interpretativo adecuado para analizar procesos sociales complejos vinculados al reasentamiento poblacional. Se aplicó un diseño descriptivo-explicativo, orientado a caracterizar los mecanismos de comunicación, consulta y participación ciudadana implementados en el reasentamiento de Morococha y explicar su incidencia en la gestión de la conflictividad generada durante el traslado asociado al Proyecto Minero Toromocho en el período 2009-2013, periodo clave para el proceso donde se concretó toda la parte de decisiones y diseño participativo del proceso, concluyendo con el traslado físico de la población de la antigua Morococha a la nueva locación construida para dicho fin.

El procedimiento metodológico se estructuró en tres fases interrelacionadas. La primera fue la fase teórico-documental, que comprendió una revisión sistemática de literatura y documentación institucional sobre participación ciudadana, reasentamientos humanos y gobernanza social en contextos extractivos. La segunda fase correspondió al trabajo de campo, centrado en la obtención de información empírica mediante técnicas cualitativas. La tercera fase se enfocó en el análisis temático, mediante procesos formales de codificación y categorización.

La población estuvo integrada por especialistas sociales involucrados en el proceso, representantes comunitarios y pobladores reasentados. A través de un muestreo no probabilístico por criterio estratégico por saturación (Vasilachis, 2014) se seleccionó una muestra de treinta participantes, distribuida entre profesionales del equipo RAP, líderes comunitarios y ciudadanos trasladados, garantizando diversidad de perspectivas y suficiencia informativa para el análisis.

La recolección de datos se sustentó en una triangulación metodológica. Se realizaron entrevistas semiestructuradas de profundidad, orientadas por categorías analíticas asociadas a comunicación estratégica y participación ciudadana; se incorporó observación participante indirecta a partir de registros institucionales del proceso; y se efectuó una revisión documental analítica de informes técnicos, actas, folletos informativos y registros fotográficos del proceso. Las entrevistas se realizaron previa obtención de consentimiento informado, registradas y procesadas, siguiendo protocolos de confidencialidad.

El análisis de los datos se desarrolló mediante codificación temática sistemática, siguiendo los lineamientos de Gibbs (2012). Se aplicó una codificación abierta y axial que permitió identificar patrones, categorías emergentes y relaciones analíticas entre mecanismos comunicacionales y gestión de conflictividad social. Aunque el análisis mostró adecuación conceptual, se presentaron limitaciones asociadas al acceso incompleto a algunos registros del proceso y al carácter sensible del tema.

En términos éticos, se aplicaron protocolos de confidencialidad, consentimiento informado y manejo seguro de información, respetando además principios de sensibilidad cultural y acceso responsable a datos comunitarios, conforme a las recomendaciones de Creswell (2014).

3. Resultados

3.1. Mecanismos de comunicación implementados

El análisis cualitativo permitió identificar que la estrategia de comunicación desarrollada en el reasentamiento de Morococha operó como un sistema socio institucional diseñado

para reducir asimetrías informativas y generar condiciones mínimas de previsibilidad social. Este sistema estuvo compuesto por dispositivos directos e indirectos que actuaron de manera complementaria a lo largo de las fases del Plan de Reasentamiento Poblacional (RAP) en estrecha relación con los interesados del proceso.

Las visitas casa por casa se configuraron como el eje operacional clave del componente comunicacional. Desde una perspectiva técnica, estas visitas constituyeron mecanismos de comunicación interpersonal directa y personalizada orientados a la gestión diferenciada de información sensible y de interés particular de cada actor o stakeholders, especialmente en temas como la valoración de predios, la asignación de viviendas y las compensaciones asociadas al PAR para cada tipo de familia. Los testimonios recogidos evidenciaron que este mecanismo permitió calibrar la transmisión de información según las características de cada unidad familiar, lo cual redujo el riesgo de interpretaciones erróneas o de perturbaciones emocionales asociadas al proceso de traslado.

Los talleres informativos y plenarios representaron un nivel de comunicación colectiva, orientados a la difusión masiva de contenidos relacionados con los impactos y beneficios del reasentamiento, las etapas del proceso, las consideraciones para acceso a los beneficios, el diseño urbano, la infraestructura proyectada, los lineamientos legales y las fases operativas del traslado. Su valor técnico radicó en la estandarización del mensaje institucional, en la reducción de rumores comunitarios y en la construcción de marcos interpretativos comunes entre actores sociales con intereses divergentes.

Por su parte, los instrumentos comunicacionales institucionales –folletos, videos explicativos, planos, maquetas y material gráfico– funcionaron como dispositivos de mediación cognitiva que permitieron representar visualmente los impactos, beneficios y etapas del proceso, como del diseño urbanístico y territorial del reasentamiento. Estos materiales facilitaron la comprensión de elementos complejos como los impactos y beneficios del reasentamiento, las etapas para la concreción del reasentamiento en sí, así como la zonificación, la distribución espacial y la infraestructura de servicios básicos, especialmente en un contexto donde no todos los actores dominaban conceptos técnicos.

Finalmente, las Oficinas de Información Permanente operaron como nodos estables de referencia, habilitando un flujo constante de consultas, registros de demanda ciudadana y retroalimentación. En términos técnicos, constituyeron un mecanismo institucional de accountability comunicacional, en tanto centralizaron, documentaron y devolvieron información de modo sistemático verificable

3.2. Procesos de consulta y validación ciudadana

El componente consultivo del reasentamiento operó como una secuencia de validación progresiva que permitió legitimar decisiones de alto impacto territorial. La primera instancia —la audiencia pública del año 2006— constituyó un mecanismo formal de consulta normativa, mediante el cual se otorgó aprobación mayoritaria al traslado, fue el momento del SI al reasentamiento. Esta audiencia cumplió la función técnica de establecer un mandato comunitario que sirvió como base de legitimidad para las fases posteriores del proceso.

En una etapa subsiguiente, los talleres barriales y especializados se constituyeron como mecanismos deliberativos orientados a recoger percepciones, evaluar preferencias territoriales y ajustar componentes del diseño urbano y los procesos colaterales del reasentamiento, con participación informada de la población involucrada. Su relevancia técnica radicó en su capacidad para integrar heterogeneidad social, recoger divergencias y generar criterios consensuados sobre la futura ciudad. La información recogida reveló que estos espacios permitieron discutir elementos estructurales como la definición de los criterios de ubicación de las familias beneficiarias en la nueva ciudad, la distribución de barrios y viviendas, la densidad residencial, la proximidad de equipamientos y la distribución de áreas públicas, generando un conocimiento compartido entre población y equipo técnico.

La consulta sobre la nomenclatura urbana constituyó un mecanismo de apropiación simbólica del territorio reubicado. Esta instancia reforzó la identificación colectiva con la Nueva Morococha y permitió que la población ejerciera agencia sobre elementos de significado urbano, lo cual es clave en procesos de reconstrucción identitaria post traslado, ratificándose el deseo de la población reasentada de mantener la vigencia histórica de la antigua locación, así como la misma estructura barrial comunitaria.

Si bien surgieron tensiones asociadas a la valoración de predios, expectativas económicas, de beneficios adicionales y normativa de asignación, el sistema consultivo con amplia participación informada permitió absorber estos desacuerdos mediante retroalimentación periódica, evitando que se convirtieran en focos de conflictividad intensificada, fortaleciéndose los diversos mecanismos de participación y comunicación entre ellos, no siendo uno de ellos, como el único válido para el proceso, sino afianzándose entre ellos su sentido de complementariedad de acuerdo al contexto y etapa del proceso.

3.3. Participación ciudadana en la gestión del proceso

La participación ciudadana informada en el proceso del reasentamiento de Morococha se estructuró como un entramado institucional compuesto por mecanismos formales, semiformales e informales que funcionaron de manera interdependiente y que permitieron

transformar la presencia comunitaria en influencia efectiva sobre decisiones estratégicas. Desde la perspectiva de la gobernanza colaborativa, estos mecanismos operaron como “dispositivos de coproducción social” que integraron información local, preocupaciones comunitarias y criterios técnicos y sociales en la toma de decisiones.

En primer lugar, los conglomerados vecinales actuaron como unidades organizativas de representación territorial. Su funcionamiento se basó en una lógica de democracia interna y movilización comunitaria, permitiendo consolidar vocerías legítimas y mediaciones entre la población y los equipos gestores del RAP. Estos conglomerados asumieron funciones como: articulación de demandas, clasificación de problemáticas por sectores, gestión de solicitudes específicas, coordinación de reuniones barriales y vigilancia del cumplimiento de compromisos institucionales, sin dejarse de lado las perspectivas y percepciones individuales de cada persona o núcleo familiar. Su existencia redujo la atomización de la demanda social y permitió la construcción de agendas comunes entre distintos sectores de la población reasentada, la definición del tipo de beneficiarios del proceso coadyuvó a gestionar mejor los niveles de posibles fuentes de conflictividad social gracias a la permanente cercanía con los actores y la gestión de información institucional clave de primera mano hacia las familias lo que incidió en su participación en el proceso.

La mesa de diálogo se conformó como un mecanismo principal de resolución institucional de controversias y conflictos potenciales. Desde un enfoque social, esta funcionó como un espacio deliberativo regulador, con procedimientos estandarizados para la identificación de problemas, discusión de alternativas, establecimiento de acuerdos para la gestión compartida de un convenio marco y la posterior verificación del cumplimiento u otros de interés mutuo y público del proceso. Las entrevistas indican que este espacio aportó al proceso como un espacio institucionalizado de comunicación entre partes, participación de los grupos de interés a través de sus representantes, así como de consulta de temas claves para el proceso para tratar asuntos críticos como asignación de viviendas excedentes, respuesta institucional ante discrepancias sobre el proceso, cumplimiento de compromisos u otros temas de interés del reasentamiento. La mesa funcionó bajo un enfoque de “gestión del conflicto en fase temprana”, evitando la acumulación de tensiones que pudieran derivar en escenarios de conflicto abierto.

El sistema de quejas y reclamos constituyó un mecanismo técnico de administración de conflictos cotidianos y micro disputas. Según la evidencia, este sistema operó bajo procedimientos de registro, clasificación, derivación y respuesta que permitieron transformar demandas informales en trámites institucionales trazables. La existencia de este sistema garantizó un proceso de retroalimentación continua, redujo la discrecionalidad

en la toma de decisiones y permitió documentar sistemáticamente los focos de preocupación ciudadana. Al actuar como un canal institucionalizado de resolución, evitó que controversias menores —como discrepancias por metraje de vivienda, fallas constructivas, asignación de lotes o problemas de servicios básicos— se convirtieran en detonadores de conflictividad.

Las visitas guiadas a Nueva Morococha cumplieron un rol clave como mecanismos de verificación empírica y socialización temprana del nuevo territorio. Desde la lógica de la planificación urbana participativa, estas visitas permitieron a los residentes observar in situ el avance de las obras, validar la información entregada en talleres, casas abiertas u otros espacios de comunicación y consulta, así como obtener claridad sobre las características de los espacios públicos y evaluar el estado de la infraestructura antes del traslado. Estas dinámicas redujeron la incertidumbre, ajustaron expectativas y permitieron identificar —con anticipación— aspectos que requerían mejoras técnicas, como acabados de viviendas, accesibilidad de servicios o distribución de predios.

Finalmente, el trabajo de mediación comunitaria desempeñó una función transversal en el proceso. Los especialistas sociales operaron como actores puente, facilitando la comunicación intercultural, traduciendo información técnica al lenguaje cotidiano, moderando tensiones y acompañando emocionalmente a familias en momentos de alta carga psicológica. La evidencia muestra que esta mediación resultó esencial para la sostenibilidad del proceso participativo en un contexto caracterizado por la preocupación, desconfianza y tensiones acumuladas por oposiciones naturales de cierto sector de la población e incluso de otros actores y grupos de interés.

En conjunto, estos mecanismos dieron lugar a un sistema participativo robusto que combinó canales deliberativos, dispositivos de resolución de conflictos y prácticas de verificación ciudadana, contribuyendo a consolidar legitimidad y fortalecer la gobernanza del reasentamiento por participación y decisión informada mayoritaria de los interesados.

3.4. Integración de los mecanismos y efectos en la gestión de la conflictividad social

El análisis integrado de la información permitió establecer que la efectividad del proceso de reasentamiento de Morococha no radicó únicamente en la existencia formal de mecanismos de comunicación, consulta y participación ciudadana, sino en la articulación sistémica entre ellos, en la concatenación de mecanismos y estrategias en las diversas etapas del proceso, no considerando a ninguna de ellas más importante que otras; sino, complementarias y a la vez de consecución en un proceso único que había que construirse paso por paso, etapa por etapa, siempre con el involucramiento informado de los

interesados e impactados por el reasentamiento. Esta articulación generó un marco de gobernanza social que funcionó como un dispositivo institucional capaz de gestionar tensiones, prevenir escalamiento de conflictos y sostener la legitimidad del proceso en el tiempo, coadyuvando a reducir riesgos sociales de ilegitimidad del proceso o focos de conflictividad a gran escala, manteniéndose las divergencias como discrepancias naturales pero posibles de gestionarse y sobre todo generar acuerdos-consensos que atiendan los intereses de las partes.

Desde una perspectiva analítica, la integración de los mecanismos operó sobre tres dimensiones centrales: reducción de incertidumbre por inadecuado acceso a información, legitimidad procedimental por procesos amplios de participación informada y decisiones voluntarias, así y contención socio institucional del conflicto en espacios construidos entre las partes producto de la relación constante así como la instauración de espacios institucionalizados con representación formal de los grupos de interés del proyecto minero que dio paso al reasentamiento.

En primer lugar, la continuidad y coherencia del flujo comunicacional redujo la asimetría de información, una de las causas estructurales del conflicto en procesos de reasentamiento. La accesibilidad a información y el transparentar los impactos del reasentamiento aportaron a cohesionar la decisión libre e informada. La transmisión constante de mensajes –por canales directos y mediáticos, tradicionales y no tradicionales– permitió que la población accediera a información verificable sobre el avance de obras, criterios de asignación, cronogramas y características urbanísticas, acceso a beneficios, condiciones del proceso, etc. Esto disminuyó la dependencia de rumores, moderó interpretaciones conflictivas y fortaleció la previsibilidad del proceso. La comunicación, por tanto, no cumplió solo un rol informativo, sino que actuó como un mecanismo preventivo de gestión de expectativas y conflictividad, reduciéndose posibilidades de corrientes de desinformación que podrían generar riesgos de conflictividad y retrasos en el proceso. La información compartida que el reasentamiento era de mutuo interés permitió a la autovaloración de los involucrados de la importancia del proceso para con sus propias vidas y casos particulares, así como para el sentido colectivo.

En segundo lugar, los mecanismos consultivos generaron legitimidad procedimental al involucrar a la población en decisiones centrales del traslado. La audiencia pública, los talleres temáticos y la consulta sobre la forma de distribución de los barrios y viviendas en la nueva ciudad, la nomenclatura urbana, etc. no solo informaron, sino que habilitaron espacios deliberativos en los cuales los residentes pudieron expresar desacuerdos, sugerir modificaciones y validar elementos del proyecto, constituyéndose para muchos como un

proceso de construcción mutua. Este proceso fortaleció la percepción mayoritaria de justicia procedimental y redujo la posibilidad de que la población interpretara el traslado como una imposición externa, si o en la mayoría de los casos como una oportunidad de mejora de condiciones de vida de las familias, teniendo siempre como en todo proceso social sectores minoritarios contrarios. La literatura sobre gobernanza extractiva señala que este tipo de legitimidad, cuando es acumulativa, fortalece la capacidad de absorción de tensiones durante fases críticas, lo cual fue verificable en el caso estudiado.

En tercer lugar, los mecanismos de participación ciudadana —comités vecinales, mesas de diálogo y sistemas de quejas y reclamos institucionales, participación en actividades del proceso— contribuyeron a la contención del conflicto al ofrecer canales institucionalizados de escucha y resolución temprana de disconformidad. La evidencia mostró que los desacuerdos más recurrentes se relacionaron con criterios de compensación, ubicación de viviendas, linderos y características constructivas. En ausencia de mecanismos formales, estos desacuerdos habrían derivado en conflictos de mayor intensidad; sin embargo, la existencia de instancias de diálogo con procedimientos estandarizados permitió tratarlos en etapas tempranas, transformando tensiones emergentes en problemáticas gestionables. Estos mecanismos operaron como amortiguadores institucionales, reduciendo la presión sobre el proceso principal y permitiendo mantener estabilidad social durante el traslado, sin dejar de mencionarse que siempre hubo sectores discordantes que se sopesaron con la decisión mayoritaria de concretar el reasentamiento luego de haber construido el proceso desde varios años atrás como una alternativa de mejora de una mayoría de población.

El componente integrador se expresó, además, en la capacidad del sistema para adaptarse a demandas emergentes. Tanto el equipo social como los actores comunitarios adecuaron estrategias, ampliaron espacios de comunicación y consulta, así como ajustaron procedimientos cuando surgían nuevos focos de tensión. Este dinamismo evidencia que el proceso funcionó bajo un enfoque de gestión adaptativa, característica que la literatura identifica como fundamental en proyectos de alta complejidad social.

A pesar de ello, se identificó que la conflictividad no desapareció, sino que fue canalizada y reconfigurada mediante los mecanismos implementados. Persistieron disputas en torno a expectativas económicas y de beneficios, valoración de predios, tiempos y condiciones del traslado, compensaciones para sectores auto denominados ancestrales, trato preferencial a dirigentes, etc.; sin embargo, estas tensiones no alcanzaron niveles de confrontación abierta debido a la presencia continua de canales institucionales, que funcionaron como espacios de ventilación controlada del conflicto.

En síntesis, la integración de los mecanismos de comunicación, consulta y participación permitió crear un entorno de gobernanza capaz de gestionar la conflictividad de forma preventiva, procesual y sostenida. La interacción entre estos mecanismos produjo un sistema social que absorbió presiones, articuló demandas y generó legitimidad, gobernanza y gobernabilidad en el territorio del proceso, configurando uno de los elementos diferenciadores más relevantes del reasentamiento de Morococha frente a otras experiencias nacionales e internacionales de desplazamiento poblacional.

4. Discusión

Los resultados del estudio permiten interpretar el funcionamiento de los mecanismos de comunicación, consulta y participación ciudadana implementados en el proceso de reasentamiento de Morococha en relación con la literatura existente y con las hipótesis de trabajo. En concordancia con Bebbington (2013) y Arellano-Yanguas (2011), se observa que la difusión sistemática de información y la habilitación de espacios deliberativos favorecen la reducción de tensiones en contextos extractivos y de alta conflictividad social. La evidencia recopilada coincide con estas perspectivas, dado que la comunicación directa, las consultas estructuradas y la participación comunitaria mostraron efectos positivos en la gestión de la conflictividad social.

Asimismo, al comparar los hallazgos con modelos de reasentamiento documentados por Cernea (1997) y Downing (2002), se identifican elementos comunes asociados a la importancia de la participación informada en la toma de decisiones, concordantes a políticas y estándares de desempeño globales. No obstante, el caso de Morococha presenta particularidades, como la articulación continua entre equipos técnicos y población reasentada, la cual permitió una interacción más constante en los espacios propios de la población que en otros procesos descritos en la región andina. Esta diferencia sugiere que la integración de mecanismos comunicacionales a lo largo de todas las etapas puede generar condiciones más favorables para la negociación social.

En contraste con estudios sobre conflictos no resueltos en proyectos extractivos peruanos —como los analizados por Tanaka (2016) respecto a Tía María o por Damonte (2018) en el caso de Conga—, el proceso de Morococha evidencia que la presencia sostenida de canales de diálogo puede contener el escalamiento del conflicto. Sin embargo, los resultados también indican que la efectividad de estos mecanismos depende de la legitimidad otorgada por la población y de la capacidad institucional para sostener acuerdos más allá de la fase inicial del reasentamiento, aspecto coherente con lo señalado por Bebbington y Humphreys (2011) sobre gobernanza y minería en los Andes.

En términos metodológicos, el estudio presenta ventajas que fortalecen la consistencia de sus interpretaciones, como la triangulación entre entrevistas y documentación institucional, y la participación de actores con distintos niveles de involucramiento en el proceso. No obstante, se reconocen limitaciones relacionadas con el acceso parcial a ciertos registros y con la posibilidad de sesgos vinculados a las posiciones institucionales de algunos informantes, lo cual coincide con las dificultades señaladas por Creswell (2014) en investigaciones cualitativas aplicadas a contextos sensibles.

En un contexto más amplio, los resultados permiten comprender el caso de Morococha como una experiencia que aporta elementos relevantes para la formulación de políticas de gestión social en proyectos extractivos. La evidencia sugiere que la cohesión entre comunicación estratégica, consulta pública y participación ciudadana puede constituir un enfoque útil para otros procesos de reasentamiento en el país. Futuros estudios podrían profundizar en análisis comparativos entre distintos modelos de reasentamiento, así como en evaluaciones longitudinales sobre los efectos socio comunitarios posteriores al traslado.

5. Conclusiones

El estudio permitió demostrar que los mecanismos de comunicación, consulta y participación ciudadana desempeñaron un papel decisivo en la gestión del proceso de reasentamiento de Morococha, al estructurar canales formales que facilitaron el flujo de información, la deliberación colectiva y la toma de decisiones informada, recomendadas por estándares internacionales. La evidencia analizada mostró que la continuidad y articulación de estos mecanismos contribuyeron a reducir la incertidumbre de la población y a contener la conflictividad social en momentos críticos del traslado, lo cual confirma la relevancia de estas herramientas en contextos extractivos de alta complejidad.

Asimismo, los resultados permitieron confirmar que un proceso de reasentamiento adquiere legitimidad cuando incorpora estrategias comunicacionales claras, consultas ciudadanas vinculadas a decisiones relevantes y espacios participativos orientados a la resolución de desacuerdos. La participación efectiva no solo fortaleció la confianza entre los actores involucrados, sino que también posibilitó que los pobladores influyeran en aspectos clave del proceso como el diseño de las viviendas, la asignación de viviendas y barrios, la definición del nuevo entorno territorial para mantener lo que ellos llamaron la vigencia histórica, fortaleciendo su sentido de apropiación del espacio reubicado y de la construcción colectiva del proceso.

El análisis evidenció, además, que la gestión de la conflictividad social no depende únicamente de la existencia de mecanismos formales, sino de su capacidad para sostenerse en el tiempo, adaptarse a las demandas emergentes y responder de manera oportuna a las

preocupaciones ciudadanas. En el caso de Morococha, la consistencia de estos mecanismos permitió anticipar desacuerdos y evitar su escalamiento, aunque persistieron tensiones naturales asociadas a las discrepancias sobre formas o condiciones de algún sector poblacional que no escalaron para motivar conflictos que generaran crisis..

Finalmente, los hallazgos subrayan la necesidad de fortalecer las políticas públicas relacionadas con el reasentamiento poblacional en el Perú, incorporando estándares que garanticen procesos comunicacionales transparentes, consultas con capacidad real de incidencia y mecanismos participativos que promuevan corresponsabilidad entre actores estatales, empresariales y comunitarios. Estas conclusiones pueden orientar nuevas investigaciones enfocadas en evaluar comparativamente distintos modelos de reasentamiento en el país, así como en analizar los efectos sociales de largo plazo posteriores al traslado.

Referencias bibliográficas

- Araujo, E. (2016). *La consulta previa versus el consentimiento previo, libre e informado en la legislación ecuatoriana*. Bachelor's thesis, loja, 33.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (1999). *Reasentamiento involuntario en los proyectos del BID: Principios y lineamientos*. Washington, D.C.
- Blasco Mira, J., & Pérez Turpín, J. (2007). *Metodologías de investigación en las ciencias de la actividad física y el deporte: ampliando horizontes*. Universidad de Alicante.
- Carrillo Hoyos, S. (2016). *El valor de la comunicación estratégica para la gestión responsable y la prevención de conflictos mineros*. Pangea Revista de la red Académica Iberoamericana de Comunicación, 325 a 360.
- Casas, C. (2017). *Conflictos mineros y acuerdos comunitarios: Identificación de mecanismos de retroalimentación*. Lima: Universidad del Pacífico.
- Damonte, G. (2019). *Reasentamiento involuntario: políticas y prácticas en los Andes*. Argentina: Universidad Nacional de La Plata.
- Minera Chinalco Perú SA (2010). *Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Toromocho, Línea de base Social-Plan de Acción para el Reasentamiento*. Lima.
- Ferran, C. (2000). *Participación comunitaria y gestión alternativa de conflictos*. Cuadernos de Trabajo Socia, 231-251.
- Garay Verástegui, V. (2020). *Responsabilidad social en la prevención del conflicto social minero*. Cusco, 2020. Lima: Universidad César Vallejo, Escuela de Posgrado.
- Gaspar Inga, J. (2020). - *Análisis de la consulta previa en la solución de conflictos socio ambientales, del Perú 2019*. Lima: Universidad César Vallejo, Escuela de Posgrado.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. (2018). *Metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C. V.

- Huamani Morales, A. (2022). *Análisis del Derecho a la Consulta Previa y la Concesión Minera, Ayacucho 2021*. Lima: Universidad César Vallejo - Escuela de Posgrado.
- Jara Vega, E. (2021). *Gestión de Conflictos Sociales en torno a las actividades mineras en el Perú en el periodo 2009-2021*. Lima: Universidad César Vallejo-Escuela de Posgrado.
- Laos Atencia, L. (2017). *Gestión de los reasentamientos poblacionales generados por proyectos de desarrollo: caso de la población desplazada de Huabal*. Lima: PUCP- Escuela de Posgrado.
- Mena, M., & Hinestroza, L. (2014). *Eficacia de la consulta previa en el trámite de licencias ambientales en el departamento del Chocó*. *Revista Civilizar*, 39- 66
<https://www.redalyc.org/html/1002/100232154002/>.
- Musset, A. (2002). *Villes nomades du nouveau mond*. Études en Sciences Sociales, París: Editions de l'école des Hautes.
- Presidencia del Consejo de ministros. (2012). *Programa de Capacitación en Gestión de Conflictos Sociales para Gobiernos Regionales y Locales*. Lima: Tarea Asociación Gráfica Educativa.
- Sánchez Carlessi, H., & Reyes Meza, C. (2006). *Metodología y diseños en investigación científica*. Visión Universitaria. doi:<https://pdfcoffee.com/tipos-y-niveles-de-investigacion-cientifica-2-pdf-free.html>

Financiación

"Esta investigación no recibió financiación externa".

Declaración de consentimiento informado

"Se obtuvo el consentimiento informado de todos los sujetos que participaron en el estudio".

Agradecimientos

Se agradece a quienes contribuyeron en el estudio, así como a quienes motivaron a la generación de conocimiento de un proceso social complejo. A la Unidad de Post Grado de la Facultad de Sociología de la UNCP por impulsar a la producción científica.

Conflictos de intereses

"Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses".

Contribución de los autores

BJFR: Administración del proyecto, Adquisición de financiación, análisis formal; conceptualización, curación de datos, investigación, metodología, recursos, supervisión, validación, visualización, escritura – borrador original, escritura – revisión y edición.